

EXPRESO AGRAVIOS

Sr. Juez en lo Civil y Comercial Común de la I° Nom.:

JUICIO: “Cabrera, Hugo Ricardo vs. Valdivieso, Luis Ricardo y otros s/ daños y perjuicios”. Expte. N° 857/10

Mariela Sbrocco, por el perito médico y de las demás condiciones personales que constan en autos, a S.S. respetuosamente digo:

I – Expreso agravios

Que en tiempo y forma, y siguiendo las instrucciones de mi mandante, vengo a expresar los agravios contra la sentencia de setiembre del 2020, en donde se regularon los honorarios del Dr. Curia, como así mismo, los honorarios de los abogados intervinientes.

A los efectos de claridad en la exposición, detallo por separado los distintos aspectos de la sentencia, que agravian a mi mandante:

1) **CONVENIO DE PARTE**: Note Excma. Cámara que las partes de este juicio, han arribado a un “acuerdo transaccional”, por lo que no hay sentencia de fondo.

En la sentencia que apelo y que agravia a mi representado, S.S. ha tomado como base para la regulación de sus honorarios, el monto acordado en ese acuerdo, del cual, mi poderdante, no ha participado.

S.S. al dictar sentencia, enuncia en el Considerando. “... corre agregado convenio que da por terminado el presente proceso, del que

participaron el actor en autos, su letrado representante y el letrado de la citada en garantía.”

En tan enunciación, queda claro que mi mandante no ha intervenido.

Esta situación le significó a mi mandante un daño importante, ya que le regularon sus honorarios, con un monto muy inferior, al que le hubiera correspondido. Se debería haber considerado el monto inicial de la demanda, más la correspondiente actualización (art.40 inc.1 ley 5480)

En el pedido de regulación de los honorarios adjunté planilla actualizada, el cual ascendía a una suma superior a los dos millones cuatrocientos mil pesos.

Este convenio transaccional, que celebraron las partes, ES TOTALMENTE AJENO A MI MANDANTE, Y POR LO TANTO, LE RESULTA INOPONIBLE.

El Dr. Curia, no ha formado parte del mismo, no estaba al tanto de tal arreglo. Por lo que es ajeno al mismo, resultándole inoponible. Concluir de manera distinta, sería avalar una tremenda injusticia y una ilegalidad.

Al respecto el código velezano, en sus arts. 1.197 y 1.199, eran claros y precisos, los terceros, que no participan en el contrato, convenio o acuerdo, son ajenos, y por lo tanto, dichos acuerdos le son inoponibles. Ese mismo criterio, se mantiene, en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en sus arts. 959 y 1021.

Hay abundante jurisprudencia al respecto: En nuestros Tribunales, *Cámara Civil y Comercial Común - sala 1 s/ cumplimiento de homologación s/ incidente de ejecución de*

honorarios. N° sent. 331, fecha sentencia 13/12/2011. Cabe aplicar al presente las disposiciones contenidas en el art. 39 inc. 1°, conforme a la doctrina y a la reiterada jurisprudencia de nuestros Tribunales, máxime, al tratarse en el caso de una regulación a un profesional -perito- que no intervino en el convenio extrajudicial. En este sentido: "Existen pronunciamientos dictados por este Tribunal en los cuales se estableció que aún cuando en la realización de la transacción judicial intervinieran los letrados de las partes, no es el monto de ella el que servirá de base a la regulación. No solo porque el art.40 inc. 1 de la ley 5480 expresamente legisla que será el monto reclamado en la demanda, con su actualización e intereses, sino por que el convenio siempre es inoponible a los profesionales que respecto al mismo revisten la calidad de terceros (arts. 1197 y 1199 del C.C.): no interesa si la transacción sobrevenida precisa o no monto, pues -lo determine o no- la base no está proporcionada por éste sino por la suma reclamada en la demanda, con actualización o intereses. El monto pactado en autos resulta menor al reclamado en la demanda, pero resulta incuestionable que éste último es el que corresponda aplicar por cuanto el perito no formó parte de ese convenio y por lo tanto resulta inoponible al mismo dicho arreglo, en igual sentido la obra de los Dres. Brito - Cardozo "Honorarios de Abogados y Procuradores", pág. 232. En igual sentido también se pronunció la Excma. Corte Suprema Justicia de la Nación al establecer que "...no corresponde otorgar eficacia vinculante, con respecto al doctor..., -el- convenio en el cual no tuvo participación, ya que ello importaría desconocer la aplicación al caso de normas expresas de derecho sustancial (arts. 851, 1195 y 1199 Código Civil) y significaría menoscabar el derecho a una justa retribución consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional (fallos 310:2829), por lo tanto cabe estar al monto de la pretensión inicial..." (in re: "Asociación de Trabajadores del Estado c/ Provincia de San Juan" de fecha 28/3/00)." Conf. Excma. Cám. Civ. Y Com. - sala 2 in re: "Santos Raúl

Décima vs. Edet S.A. S/ daños y perjuicios" Sentencia: 553, fecha 28/10/2002 - Dres. Gonzalez de Ponssa - Ávila. Dres. Avila - Ibañez.

"Si las partes han celebrado un acuerdo para poner fin al litigio sin intervención ni citación a prestar conformidad del perito, el mismo le es inoponible a éste, razón por la cual el monto convenido no puede tomarse como base para regular los honorarios del citado profesional (CNCiv., sala J, junio 30-994. Berezovsky, Raquel c. Italconstruet Rio de la Plata S.S.) La Ley, 1995 - A 179 - DJ, 1995-1-549.

"Para fijar los honorarios de los peritos debe tenerse en cuenta no sólo el arancel profesional respectivo sino también los honorarios de los demás profesionales intervinientes. Desde ese punto de vista, si bien el plenario de esta Cámara que determinó la inoponibilidad de la transacción a los efectos regulatorios, se refiere a los letrados que habiendo actuado en el juicio no intervinieron en dicho acto, no se advierte razón para apartarse de ese principio por el hecho de tratarse de profesionales de una disciplina ajena al derecho." (CC0101 MP 75141 RSI-931-89, noviembre 2-989.- Mendieta, Eduardo c. Cosentino de Fasce, María y otro)

"El acuerdo transaccional labrado sin participación de los profesionales que asistieron a las partes convierte a éstos en terceros (arts. 1195 y 1199 del Código Civil), ya que son sujetos extraños a la relación jurídica de que se trata; si bien el acuerdo es asimilable legalmente a la sentencia por sus efectos, a los fines de su ejecución y de la estabilidad de la cosa juzgada, esa condición no altera su naturaleza negocial, por la que establece una relación jurídica exclusivamente entre quienes participaron en ella, por lo que el valor allí determinado para el pleito sólo tiene vigencia a los fines regulatorios con respecto a los

profesionales que han intervenido en ese acto, pero no comprende a quienes no participaron en él” (Lasala, Mario Oscar c/ Logística La Serenísima S.A. Y otros y otros s/ despedido) L.1067.XLII.RHE 14/04/2009. fallos:332:837

2) **CONVENIO NO HOMOLOGADO**: Me agravia que el convenio que tomaron en cuenta para fijar los honorarios de mi mandante, y que al decir, de S.S. de grado “da por terminado el presente proceso” no haya sido homologado.

La homologación judicial, significa, sin duda, el control jurisdiccional del cumplimiento de todos los recaudos formales y de fondo, exigidos por ley.

El art. 201 del digesto provincial, dispone: “*Ante el acto de la transacción, el juez se limitará a examinar si llena esos requisitos de la ley de fondo. En caso afirmativo, lo homologará; en caso negativo lo desestimará y el proceso continuará según su estado. Homologada la transacción, podrá ejecutarse como las sentencias*”

En el caso de autos, el acuerdo transaccional presentado por las partes **NO HA SIDO HOMOLOGADO**, sin embargo el juez de grado, lo ha tomado para dar por terminado el proceso.

“En caso de existir un acuerdo transaccional o bien una conciliación entre las partes enfrentadas en un determinado proceso, la actividad jurisdiccional se limita a comprobar la concurrencia de los recaudos formales, exigidos por la ley para otorgarle validez a dicho convenio; en tal sentido se sostuvo que la única finalidad del pronunciamiento requerido en un proceso sobre homologación de convenio es otorgarle firmeza a ciertos actos de las partes, sin que ello implique resolver cuestiones que vayan

más allá de la comprobación de las condiciones legales intrínsecas y extrínsecas para su validez, en casos en que las pretensiones merecieron un debate más amplio” Sumario de fallo, 24 de mayo de 2001. Id SAIJ: SU20006085. Fallos a los que aplica “Caballero, Eugenia Timotea y otro c/ Gimenez, Silvia Isabel s/ desalojo. Sentencia. Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial . 24/5/2001.

Note Excma. Cámara, que el convenio fue celebrado extrajudicialmente, no se celebró dentro del Juzgado con S.S. como garante de dicha transacción, el actor en autos, no ha sido llamado a ratificar su firma, la firma inserta en el convenio no ha sido certificada ante ningún escribano público.

Y si bien, el acuerdo transaccional de partes puede dar por terminado un litigio, eso no lo discuto, lo cierto es que deben estar cubiertas ciertas formalidades para tomarlo como válido, características que no sabemos si han sido salvadas en este caso, ya que no ha sido homologado.

Las partes han presentado el convenio en el expediente y si bien, solicitaron la homologación judicial, no le dieron el impulso procesal necesario, para que se cumpliera dicho acto.

Desde el ángulo procesal, la homologación judicial del convenio de las partes en el juicio, importa un modo de terminación del proceso, sustituyendo a la sentencia definitiva y adquiriendo el valor de cosa juzgada.

En el caso de autos, **S.S. NO HA HOMOLOGADO EL ACUERDO**, sin embargo, lo ha considerado que es el que da por terminado el presente proceso, y atento a ello, lo toma como base regulatoria de los honorarios de todos los profesionales intervinientes en el juicio.

Presuponemos que el actor ha sido bien asesorado e informado por su representante legal, y que a pesar de tener, prácticamente un juicio ganado,

con una planilla de un monto superior a dos millones, haya entendido que le era favorable acordar por \$400.000.

Suponemos que ha prevalecido la buena fe de los acuerdos, sin embargo, eso no modifica que sigue siendo, un acuerdo, sin homologar, totalmente ajeno a mi mandante, y por lo tanto, inoponible.

3) HONORARIOS INFERIOR A CONSULTA ESCRITA: le agravia a mi mandante, que en el hipotético caso, que se considerase que habría que aplicar el monto del acuerdo transaccional, en la sentencia no se ha dado cumplimiento con el art. 7 de la ley 7897.

A pesar que aclara S.S. que aplica la ley N° 7897, la de los profesionales de Ciencias Económicas, atendiendo a los porcentajes, entre los cuales debe fijar los honorarios, no ha dado cumplimiento con el artículo 7, ya que los \$16.000.- que fueron regulados, es un monto inferior a una consulta escrita, vigente a la fecha del dictado. En ese momento ascendía a \$17.610.-

"... Aplicando al máximo de la escala prevista (8%) el monto resultante es menor a una consulta escrita vigente a la fecha de la resolución, por lo que existiendo la prohibición de regular los honorarios por un monto inferior al de una consulta escrita (art.7 ley 7897 - aplicable analógicamente al caso) es ajustado a derecho fijar la regulación en \$2.040.- Dras. Leone Cervera - Amenabar. Camará Civil y Comercial Común - sala 2. Herrera, Miguel Fernando vs. Rivadeneira Ramón Mario y otro s/ daños y perjuicios. N° sentencia 208 - fecha 08/05/2017. Registro: 00048678-03.

4) **CALCULO DE LA BASE, SIN INTERESES**: Agravia a mi mandante, que en el hipotético caso que corresponda aplicar la base regulatoria del convenio celebrado entre las partes, se haya tomado ese monto, sin intereses.

Note Excma. Cámara, que el convenio fue celebrado el 11 de febrero de 2020 y la sentencia de los honorarios se dictó a fines de setiembre de este año, por lo que habían transcurrido casi siete meses. De más está aclarar, que en este año de pandemia, donde la dura realidad económica ha golpeado fuertemente en todos los ámbitos y donde la inflación, es un determinante en todos los aspectos económicos, el Juez de grado, haya tomado el monto del convenio, sin el cálculo de los respectivos intereses.

II – Cuestiones a considerar

Corresponde aclarar algunos aspectos, que hacen a la historia de esta causa y que han perjudicado a mi mandante.

Mi poderdante, el perito médico Curia, fue sorteado, apersonándose y aceptando el cargo el 08/09/2011, para realizar una pericia médica, prueba que fue ofrecida por la Compañía de Seguros.

Su trabajo pericial fue presentado el 15-12-2011 (fs. 258/260) contestando la impugnación presentada por la propia oferente, el 21-05-2012. En esta oportunidad, concluyó su labor profesional.

El 05/05/2014, solicita su regulación de honorarios (fs. 468), pidiéndola sobre la base de los \$615.000.- la cual fue denegada el 19/05/2014.

Pasaron más de ocho años, desde que concluyó su labor profesional, en un proceso, que él actuó como un auxiliar de la justicia.

Y como auxiliares de justicia los alcanza las garantías de independencia e imparcialidad. Es reiterada la jurisprudencia que señala el carácter de auxiliares de la justicia, lo cual impone el deber de proteger sus emolumentos con independencia de la imposición de costas y con el objeto de desvincularlo del resultado del juicio. (CNCiv. y Com. Fed. Sala II, 28/04/87 ED T.125).

"Si el perito solicita la regulación de sus honorarios en forma anticipada, en virtud que su labor ha sido llevada a cabo hace largo tiempo, y siéndole inoponible la demora en el trámite del proceso, corresponde hacer lugar al pedido ya que no cabe sujetar su interés a las eventualidades del asunto o, inclusive, a la actividad de los integrantes" (Camara nacional de Apelaciones en lo Civil Cap. Fed. Sala G, Saenz y Marco SRL c/ M.C.B.A. S/ ART 250 C.P.C. Civil interlocutorio del 05/11/96).

Mi mandante pidió su regulación de honorarios, sin embargo le fue denegada.

En este proceso, se suspendieron los plazos procesales, en virtud de no tener la condena en sede penal. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la existencia de una cuestión prejudicial no autoriza a postergar el dictado de la sentencia civil, si tal circunstancia configura una privación de justicia. (cfr. CS, sentencia del 21/11/73, La Ley, 154-85, causa Ataka vs. González)

En consonancia, la Suprema Corte Provincial, resolvió afirmativamente la necesidad de dictar la sentencia en sede civil, aunque no exista pronunciamiento en jurisdicción penal (cc CSJT, sentencia 1089 del

09/12/2000, causa “Orquera, Darío L. vs. Sol E. vs. Sol San Javier S.A. s/ daños y perjuicios. (Cita Cam. Civil y Comercial Común- Sala I de Tucumán, sentencia 477 del 28/11/2013 s/ daños y perjuicios)

Las partes llegaron a un acuerdo transaccional, por un monto casi irrisorio, si se tiene en cuenta, el tiempo transcurrido y las pruebas producidas en autos.

En dicho convenio, no se fijaron los honorarios de los abogados actuantes, lo cual no significa necesariamente, que no los hayan cobrado. Es difícil de creer, que no hayan pedido la regulación después del tiempo transcurrido desde la celebración del convenio.

En el convenio no se contemplaron los honorarios de los peritos actuantes. La compañía de Seguros, fue la oferente de la prueba pericial, y a ella le correspondía afrontar el pago.

Con todo respeto, le pregunto a la Excma. Cámara, podemos concluir que en este convenio transaccional, ha prevalecido la buena fe?

Sin dudas que el estudio de la buena o mala fe en las relaciones jurídicas es una de las cuestiones que mayor atención ha concitado en la doctrina autoral y jurisprudencial desde los albores de la ciencia jurídica, permaneciendo inalterable su riqueza temática.

III - Petitorio

Por todo lo expuesto solicito:

- 1) Me tenga por presentada la expresión de agravios, en tiempo y forma.
- 2) Se corra traslado de la misma, por el término de ley.

3) Oportunamente, se eleve al Superior, haciendo lugar al planteo formulado, dictándose sentencia sustitutiva, estableciendo los honorarios de mi mandante de acuerdo a lo expuesto.

Provea S.S. de conformidad.

JUSTICIA.